

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL



JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA

Bogotá D.C., veinte (20) de agosto de dos mil diecinueve (2019).

Radicación: 110013335 009 **2018 00284 00**
Demandante: Eduardo Arias Martínez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

EJECUTIVO

(Repone, declara la caducidad)

El Despacho procede a decidir el recurso de reposición interpuesto contra el auto del 4 de marzo de 2019, por la apoderada de la entidad ejecutada, mediante el cual se libró orden de pago.

La recurrente alegó el incumplimiento de requisitos formales¹ del título, que para el asunto que nos ocupa al no reunirlos el título presentado, no se dan los elementos necesarios para librar mandamiento de pago.

Al estar frente a un título de carácter complejo, señala la demandada, no es suficiente la presentación de la sentencia autenticada; también es necesaria la solicitud escrita presentada por el ejecutante ante la entidad para lograr el cumplimiento de la sentencia judicial.

Respecto a la falta de legitimación en la causa por pasiva, la recurrente afirmó que el acto administrativo que dio cumplimiento al fallo fue expedido por la extinta CAJANAL y los intereses moratorios estarían a cargo de dicha entidad y no de la UGPP.

Por otra parte, adujo la caducidad de la acción ejecutiva como quiera que posterior a la ejecutoria de la sentencia, y finalizados los 18 meses previstos en el Decreto 01 de 1984, la obligación se hizo exigible para la entidad a partir del 15 de enero de 2010, hasta el 16 de enero de 2015, término que tuvo la parte ejecutante para presentar la acción ejecutiva,

¹ <<la existencia de una obligación clara, expresa y exigible...>>

Ejecutivo**Expediente:** 110013335 009 201800284 00**Demandante:** Eduardo Arias Martínez**Demandada:** Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

sin embargo la demanda fue presentada hasta el 11 de julio de 2018, tres años después de haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad previsto en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

Frente a la prescripción, indicó que es el fenómeno mediante el cual el ejercicio de un derecho se adquiere o se extingue con el sólo transcurso del tiempo, situación muy diferente a la caducidad, ésta última relacionada con la oportunidad de acudir a la jurisdicción competente para instaurar la correspondiente acción legal.

De esta forma, iteró que la sentencia proferida por este juzgado fue ejecutoriada el 14 de julio de 2008, y en virtud del Decreto 01 de 1984, la exigibilidad de la obligación se presenta 18 meses después de ejecutoriada la sentencia, es decir, la obligación se hace exigible para la entidad a partir del 15 de enero de 2010, y el demandante tenía hasta el 16 de enero de 2015 para presentar la acción ejecutiva, sin embargo la presentó el 11 de julio de 2018, tres años después de haber operado el fenómeno jurídico de la prescripción.

Previamente a resolver, el despacho hace las siguientes,

CONSIDERACIONES

Sobre las razones de inconformidad contra el mandamiento de pago:

1.- Incumplimiento de requisitos formales del título.- La entidad aduce que analizando el caso en concreto, se puede evidenciar que no se dan los elementos necesarios para librar mandamiento de pago, por no reunir los requisitos formales y de fondo que deben integrar el título; de igual forma señala que estamos frente a un título de carácter complejo, y por tanto dicho título queda investido de unos requisitos adicionales a los que ostenta un título simple, en donde el término complejo hace referencia a que no basta la mera sentencia para exigir su cumplimiento vía jurisdiccional, sino que el mismo debe estar acompañado de todas las formalidades, tales como la solicitud escrita presentada por el ejecutante ante la entidad para lograr el cumplimiento de la sentencia judicial.

Al respecto, es dable destacar que, contrario a lo afirmado por la entidad recurrente, y tal como se estudió al librar mandamiento de pago, las sentencias base de ejecución sí contienen la obligación clara, expresa y exigible frente a la que se libró mandamiento de pago, habida

Ejecutivo**Expediente:** 110013335 009 201800284 00**Demandante:** Eduardo Arias Martínez**Demandada:** Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

consideración de que, en ellas se ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación del demandante con el 75% del promedio de todos los salarios devengados, la indexación de las sumas a reconocer y el cumplimiento de la misma en los términos establecidos en el artículo 177 del CCA, el cual prevé el reconocimiento de intereses moratorios.

Y esa obligación resulta exigible, puesto que ya transcurrió el término establecido en ese mismo artículo para que esas sentencias fueran ejecutables y, por lo mismo, exigibles ante la Jurisdicción, es decir con el cumplimiento de los requisitos legales.

2.- Falta de legitimación en la causa.- En efecto, la UGPP dice no estar legitimada para ser demandada en este proceso y pagar los intereses moratorios, no obstante, tal posición ha sido ampliamente debatido por el Tribunal Administrativo² y el Consejo de Estado³, en el entendido de que, con la extinción de CAJANAL EICE, el 12 de junio de 2013, se estableció su sustitución por la UGPP, como entidad que por ley la sucedió, en los derechos y en las obligaciones, incluido el régimen pensional, por lo que opera la sucesión procesal, incluido cumplir las sentencias judiciales.

Los intereses son una consecuencia legal, una sanción⁴ accesoria y prevista para el eventual incumplimiento de la obligación principal, en el caso para el no pago oportuno de la condena impuesta por la jurisdicción de lo contencioso administrativo en sentencia ejecutoriada y vencido el plazo para hacerlo.

La conclusión de los órganos de la jurisdicción, con igual criterio al que se aplica en la cosa juzgada sobre identidad jurídica de partes⁵, pues aquí jurídicamente es la misma parte, hace desestimable esta excepción.

3.- Caducidad de la acción ejecutiva.- Esta excepción, en cuanto parte de reconocer el derecho, pero aduce su extinción, es el motivo por el que, a su juicio, no es posible su reclamo en este proceso, hace necesario abordar la figura jurídica propuesta, en atención al artículo 177 del CCA, código vigente para cuando se expidió la sentencia, estatuto procesal que establece:

² Tribunal Administrativo de Cundinamarca (19 de enero de 2017. M.P Dr. José maría Armenta Fuentes- Rad. 2015-0688) (9 de febrero de 2017. M.P Dr. Israel Soler Pedraza- Rad 2015-0175) (20 de abril de 2017. M. Samuel José Ramírez Poveda) (01 de junio de 2017 M.P Dr. Luis Alberto Álvarez Parra - Rad. 2015-0476)

³ Concepto de la Sala de Consulta y servicio Civil – 19 de agosto de 2015- rad. 11001-03-06-000-2015-00066-000

⁴ Art. 6 C. C.

⁵ Art. 303 CGP.

Ejecutivo**Expediente:** 110013335 009 201800284 00**Demandante:** Eduardo Arias Martínez**Demandada:** Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)<<Art. 177.- **Efectividad de condenas contra entidades públicas.**

Cuando se condene a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones del Ministerio Público frente a la entidad condenada.

{...}

Será causal de mala conducta de los funcionarios encargados de ejecutar los presupuestos públicos, pagar las apropiaciones para cumplimiento de condenas más lentamente que el resto. Tales condenas, además serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho (18) meses después de su ejecutoria.>> (Subrayas del despacho).

En cuanto a la oportunidad para deprecar la ejecución o caducidad propiamente dicha, el artículo 136 del CCA norma en cuya vigencia empezó a contarse el plazo⁶, precisa:

<<Artículo 136. Modificado por art. 23 Decreto 2304 de 1989 y por el art. 44 Ley 446 de 1998.

{...}

11. La acción ejecutiva derivada de decisiones judiciales proferidas por esta jurisdicción, caducará al cabo de cinco (5) años, contados a partir de la exigibilidad del respectivo derecho. La exigibilidad será la señalada por la ley o la prevista por la respectiva decisión judicial.>> (Subrayas del despacho).

Entonces, después de los 18 meses para la exigibilidad (ART. 177 CCA) procede iniciar el conteo de los 5 años previstos para la caducidad.

Sin embargo, ese término de caducidad puede ser objeto de suspensión, como lo fue y por cuatro -4- años, como está previsto en los decretos de liquidación de la entidad⁷, lo que ha sido objeto de pronunciamientos por el Consejo de Estado, como se verá a continuación.

⁶ Ver arts. 266 CCA y 308 CPACA.

⁷ Entre el 12 de junio de 2009 y el 11 de junio de 2013 (Decreto 2196 de 2009 y Ley 550 de 1999) y sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, de 26 de abril de 2018, radicado 76001-23-33-000-2016-01765-01(4072-17), actor Nardelly Giraldo de Álvarez, demandado UGPP.

Ejecutivo**Expediente:** 110013335 009 201800284 00**Demandante:** Eduardo Arias Martínez**Demandada:** Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Advierte la jurisprudencia que, para que opere la suspensión del plazo de caducidad, es una exigencia la existencia de cierta diligencia, solo así puede cobrar a la UGPP las obligaciones pensionales provenientes de una condena por sentencia judicial a CAJANAL EICE.

Por la claridad de la jurisprudencia, en cuanto a que solo si se presentó ante CAJANAL EICE en Liquidación la reclamación para el pago, antes del 8 de noviembre de 2011 (Decreto 4269 de 2011), se puede continuar contra la UGPP como sucesora, para que no operara la caducidad⁸, se transcribe la parte pertinente:

<<Así las cosas, si bien en decisiones recientes de la Secciones Segunda y Cuarta de esta Corporación se señaló que la caducidad frente a sentencias de condena contra CAJANAL o CAJANAL EN LIQUIDACIÓN se suspendió durante los cuatro (4) años que duró su trámite liquidatorio, ello **solo resulta aplicable a aquellos casos con características especiales** analizadas en ellos en los cuales se **impidió que antes del 12 de junio de 2013 se ejecutara judicialmente la obligación** contra CAJANAL o la UGPP.

Por el contrario, la anterior regla no puede ser aplicada frente a los fallos condenatorios ejecutoriados y/o cuyas peticiones de cumplimiento se radicaron con posterioridad al 8 de noviembre de 2011, en tanto que: a. Frente a ellas solo puede operar la suspensión del término de caducidad hasta el 8 de noviembre de 2011, momento hasta el cual sólo era viable acudir ante CAJANAL EN LIQUIDACIÓN para tal efecto. b. A partir de esa fecha la obligación de satisfacer el crédito recayó legalmente en la UGPP, conforme lo dispuso el Decreto 4269 de 2011 y las personas estaban habilitadas legalmente para ejecutar las condenas en contra de la UGPP. c. Por ello, tampoco resultaría proporcional para el Estado deudor el extender los efectos de suspensión de la caducidad por cuatro años, como sí sucede con los casos anteriores.

De esta forma, es necesario que el juez identifique **a partir de qué momento se hizo exigible la obligación judicial y la fecha en la cual se pudo efectivamente perseguir judicialmente su cumplimiento** ante CAJANAL o UGPP, teniendo en cuenta que la caducidad de medio de control se suspenderá sólo a partir del momento en que inició el periodo liquidatorio de CAJANAL EICE y se reactivará: a. El 8 de noviembre de 2011 si la petición de cumplimiento se realizó y competía atenderla a la UGPP de acuerdo con el Decreto 4269 de 2011 o, b. Para aquellas obligaciones cuya petición de cumplimiento

⁸ Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, C. P. William Hernández Gómez, 30 de junio de 2016, radicado 25000-23-42-000-2013-06595-01(3637-14), actor: Luis Francisco Estévez Gómez, demandado UGPP.

Ejecutivo**Expediente:** 110013335 009 201800284 00**Demandante:** Eduardo Arias Martínez**Demandada:** Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

correspondía atender a CAJANAL en liquidación, conforme el mismo decreto, la reactivación será el 12 de junio de 2013, día siguiente a la fecha en la que culminó la liquidación de aquella entidad y por ende la obligación podía perseguirse en cabeza de la UGPP⁹.>>

Entonces, para saber si se suspendió o no el plazo de caducidad y poder sumar a los dieciocho meses de exigibilidad, los cuatro años de suspensión, más los cinco de caducidad, se debe verificar la satisfacción de lo establecido por la jurisprudencia.

En este caso la sentencia que se pretende ejecutar está ejecutoriada desde el 17 de julio de 2008, conforme se adujo en el proveído que libró mandamiento de pago (fl. 57).

Como la jurisprudencia, de lo cual es ejemplo la citada anteriormente, estableció que la suspensión de la caducidad opera o es aplicable si se satisface la condición que depende por una parte de **a partir de qué momento se hizo exigible la obligación judicial y la fecha en la cual se pudo efectivamente perseguir judicialmente su cumplimiento** ante CAJANAL o UGPP, y por otra parte esa **características especial que impidió que antes del 12 de junio de 2013 se ejecutara judicialmente la obligación**, es decir, con la demanda la parte tiene esa carga procesal probatoria, consistente en demostrar que realizó el cobro, ante el liquidador y/o ante el liquidador de la entidad y pese a ello no pudo hacer efectiva la obligación, se le **impidió** la satisfacción del crédito.

En el presente caso no se aportó prueba alguna destinada a demostrar dicho requisito para que operara la suspensión de la caducidad y, como no operó, entonces el despacho concluye que no hubo dicha suspensión, transcurrió ordinariamente el plazo correspondiente.

Así las cosas, los 18 meses para la exigibilidad de la obligación del 18 de julio de 2008 venció el 19 de enero de 2010 y los 5 años siguientes o contados a partir de esta fecha se cumplieron el 19 de enero de 2015.

Esta demanda fue presentada el 12 de junio de 2018 (fl. 1), fecha posterior al vencimiento del plazo legal de caducidad, es decir, cuando había perdido el derecho de acción para este proceso ejecutivo, por tal fenómeno procesal se impide adelantar cualquier trámite jurisdiccional.

⁹ Ibídem.

Ejecutivo

Expediente: 110013335 009 201800284 00

Demandante: Eduardo Arias Martínez

Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

En consecuencia, el despacho declarará que operó la caducidad.

4.- Prescripción.- Al igual que la caducidad esta excepción tiene vocación de prosperidad, por cuanto según lo previsto en el artículo 2536 Código Civil, la acción ejecutiva se prescribe por 5 años, término que sí transcurrió en el sub lite, teniendo en cuenta, se itera, que la sentencia quedó ejecutoriada el 17 de julio de 2008, la exigibilidad fue 18 meses después y la fecha de la presentación de la demanda ejecutiva tuvo lugar el 12 de junio de 2018 (fl. 1).

En mérito de lo expuesto el despacho.

RESUELVE

PRIMERO: REPONER el auto de 4 de marzo de 2019 en los términos solicitados por la parte ejecutada y declarar que operaron la **CADUCIDAD** de la acción ejecutiva para adelantar el proceso ejecutivo derivado de sentencia de este Despacho contra la liquidada **CAJANAL EICE** y la **PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA** del derecho.

SEGUNDO: Reconocer personería adjetiva al abogado **Gustavo Enrique Montañez Rodríguez** identificado con cédula de ciudadanía 79.505.485, portador de la tarjeta profesional 129.096 del C. S. de la J., como apoderado especial de la parte demandada, conforme a las facultades otorgadas en el poder obrante a folios 88 a 106.

TERCERO: RECONOCER personería a la abogada **Ángela Julieth Cardozo Veira** identificada con cédula de ciudadanía 1.115.069.399 y tarjeta profesional 231.165 del C. S. de la J., como apoderada sustituta de la parte demandada, en los términos y para los fines de la sustitución del poder que obra en el folio 77.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


GUILLERMO POVEDA PERDOMO
Juez

Ejecutivo

Expediente: 110013335 009 201800284 00

Demandante: Eduardo Arias Martínez

Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

SCVE

**JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BOGOTÁ DC, SECCIÓN SEGUNDA**

NOTIFICACION POR ESTADO

El presente auto, se notifica a las partes por anotación en estado de fecha **VEINTIUNO (21) DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE (2019)** a las 8:00 a.m. de conformidad con lo establecido en el artículo 201 del CPACA.

MIRYAM YANNETH MARTÍNEZ CORTÉS
Secretaria